Naciones Unidas A/80/382

Asamblea General

Distr. general
16 de septiembre de 2025
Español
Original: inglés

Octogésimo período de sesiones
Tema 71 c) del programa
Promoción y protección de los derechos humanos: situaciones de los derechos humanos e informes de relatores y representantes especiales

Situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia

Nota del Secretario General*

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, Mariana Katzarova, presentado de conformidad con la resolución 57/20 del Consejo de Derechos Humanos.

* Este documento se envió a los servicios de conferencias fuera de plazo a fin de incluir la información más reciente.

25-14832 (S) 170925 101025

Se ruega reciclar

Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, Mariana Katzarova

Bajo el yugo del miedo: silenciar la disidencia y la expresión de opiniones contrarias a la guerra en la Federación de Rusia en nombre de la seguridad nacional

Resumen

El presente informe de la Relatora Especial examina el modo en que la legislación de la Federación de Rusia relativa a la seguridad pública y nacional se ha instrumentalizado indebidamente como parte de una estrategia dirigida a suprimir la disidencia y las opiniones en contra de la guerra. Se señalan las incoherencias entre las leyes nacionales relativas a la lucha contra el terrorismo, el extremismo, el espionaje y la traición, y las obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, incluidas las violaciones de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La Relatora Especial pone de relieve una alarmante intensificación de estas prácticas desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación de Rusia en febrero de 2022, caracterizada por el abuso de la legislación y el acoso judicial contra actores de la sociedad civil, periodistas, abogados, figuras políticas y ciudadanos de a pie que expresan opiniones críticas con la guerra. El informe contiene pruebas de detenciones arbitrarias generalizadas y sistemáticas, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, muertes de personas detenidas, detención en régimen de incomunicación y enjuiciamiento de prisioneros de guerra y civiles ucranianos, detenidos por las autoridades rusas bajo acusación de terrorismo, espionaje y traición. La Relatora Especial formula recomendaciones dirigidas a las autoridades rusas y a la comunidad internacional.

I. Introducción

1. En su segundo informe temático[1], presentado a la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en la resolución 57/20 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial se centra especialmente en el período posterior a la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, durante el cual aumentó drásticamente el abuso de las leyes de seguridad nacional y seguridad pública.

2. Este abuso generalizado de la lucha contra el terrorismo, el extremismo, la traición, el espionaje y otras disposiciones del Código Penal ruso relacionadas con la seguridad nacional se dirige de forma desproporcionada contra la disidencia y la expresión de opiniones contrarias a la guerra y las protestas pacíficas protegidas por el derecho internacional. Esta herramienta jurídica se ha convertido en una estrategia deliberada, generalizada y sistemática para reprimir las voces independientes, desmantelar la sociedad civil y consolidar el control autoritario, en flagrante violación de las obligaciones de la Federación de Rusia en virtud del derecho internacional.

3. Los activistas pacíficos contra la guerra y los actores de la sociedad civil, los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los abogados, las figuras políticas y los ciudadanos de a pie críticos con el Gobierno han sido objeto de persecución constante. Las minorías religiosas, las personas LGBT[2], los Pueblos Indígenas y las minorías nacionales también han sido objeto de ataques por cuestionar la narrativa oficial sobre los “valores tradicionales” y la “identidad nacional”. Este patrón se extiende al enjuiciamiento y encarcelamiento de niños por expresar legítimamente su disidencia.

4. También es preocupante el abuso de la legislación rusa sobre seguridad pública y nacional contra los prisioneros de guerra y civiles ucranianos detenidos, incluidos los trasladados a la fuerza dentro de los territorios ocupados o deportados a la Federación de Rusia. Muchos han sido condenados a largas penas de prisión, acusados de extremismo, terrorismo, espionaje y traición como castigo por pertenecer o sospecharse que apoyan al ejército ucraniano, violando la prohibición absoluta de la desaparición forzada, la tortura y las confesiones obtenidas mediante coacción, así como las garantías de un juicio justo.

II. Metodología

5. Los esfuerzos de la Relatora Especial por entablar contactos con las autoridades rusas y las solicitudes de visitas al país han quedado sin respuesta[3]. Por ello, el presente informe se basa en la información recibida de una amplia variedad de fuentes y en un amplio examen de la legislación rusa junto con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de carácter vinculante.

6. Se recibieron contribuciones de organizaciones de derechos humanos y se celebraron consultas con abogados defensores, defensores de los derechos humanos, grupos de Pueblos Indígenas y representantes de la sociedad civil en general[4]. Se recibió información de víctimas y testigos, incluidos testimonios de primera mano de personas que han sido condenadas y han cumplido penas de prisión por cargos de

[1] Complemento de A/HRC/57/59.

[2] A lo largo del presente informe, debe entenderse que la sigla “LGBT” incluye personas lesbianas, gais, bisexuales, y transgénero y otras personas de género diverso.

[3] Véase https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2045795.

[4] El presente informe se basa en un análisis de la información recibida de víctimas de violaciones de derechos humanos de dentro y fuera de la Federación de Rusia, incluso durante las consultas. La Secretaría dispone de los registros de las contribuciones originales.

índole política, víctimas de tortura y sus familias, y personas de nacionalidad rusa en el exilio sometidas a enjuiciamiento penal en rebeldía. En el informe, la Relatora Especial también se basa en documentos judiciales, registros y estadísticas oficiales, así como en fuentes abiertas.

7. Debido a las limitaciones de espacio, solo se han podido incluir algunas causas a modo ilustrativo. Sin embargo, la Relatora Especial tiene conocimiento de múltiples ejemplos que demuestran el abuso grave, generalizado y sistemático de la legislación sobre seguridad pública y nacional para silenciar la disidencia en la Federación de Rusia.

III. Instrumentalización de la legislación relativa a la seguridad pública y nacional: la estrategia de la Federación de Rusia para reprimir la disidencia

A. Abuso de la legislación de seguridad nacional

Traición

8. Desde febrero de 2022, la traición, definida en el artículo 275 del Código Penal, ha pasado de ser una disposición de aplicación restringida a convertirse en un amplio instrumento de represión política. Antes de la guerra, el número de causas por traición era de una media de 10 a 15 al año, y en ellas estaban implicadas personas con acceso a secretos de Estado. Entre los enjuiciamientos por motivos políticos cabe destacar el del periodista Ivan Safronov, detenido en julio de 2020 y condenado a 22 años de prisión por presunta colaboración con los servicios de inteligencia checos.

9. Después de 2022, las causas en virtud del artículo 275 se dispararon, con 167 sentencias dictadas en 2023, 361 en 2024 y 232 hasta julio de 2025, lo que supone un aumento de casi 33 veces respecto de las cifras anteriores a la guerra, con 774 personas procesadas con arreglo a artículos relacionados con la traición. Este aumento se produjo tras la ampliación en julio de 2022 de los cargos de traición para incluir "pasarse al bando enemigo"[5], que representaron el 59 % de los enjuiciamientos, a menudo dirigidos contra personas acusadas de intentar unirse a las fuerzas ucranianas o de mostrar apoyo en línea. No se han registrado absoluciones y al menos nueve personas han muerto mientras se encontraban detenidos. Los juicios se celebran tanto en la Federación de Rusia como en los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Debido a que esos juicios se celebran a puerta cerrada y no se proporciona suficiente información al respecto, cabe suponer que las cifras reales son más elevadas.

10. Desde 2023, incluso las pequeñas donaciones económicas a entidades ucranianas se castigan como "traición". En abril de 2024, Nina Slobodchikova fue condenada a 12 años de prisión por haber donado 50 dólares a la cuenta de un bloguero ucraniano un año antes.

11. Las disposiciones ampliadas sobre traición, el aumento de los enjuiciamientos, las detenciones arbitrarias, las largas condenas y la tortura reflejan un esfuerzo sistemático por reprimir la disidencia bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional. La enmienda de abril de 2023 que eleva la pena máxima por traición a cadena perpetua refuerza esta trayectoria de represión[6].

[5] Ley Federal núm. 260-FZ, de 14 de julio de 2022.
[6] Ley Federal núm. 157-FZ, de 28 de abril de 2023.

Cooperación confidencial con un Estado extranjero

12. El artículo 275.1, introducido en julio de 2022[7] y modificado en diciembre de 2024[8], tipifica como delito la "cooperación confidencial" con Estados u organizaciones extranjeras que se consideren perjudiciales para la seguridad de Rusia. Se aplica tanto a ciudadanos rusos como a extranjeros y no exige la transferencia de información clasificada ni la colaboración directa con los servicios de inteligencia. Las interacciones ordinarias, como comunicaciones privadas o el intercambio de información no secreta y opiniones políticas con entidades extranjeras, pueden tratarse como amenazas a la seguridad. Con penas de hasta ocho años de prisión, se ha convertido en una herramienta versátil para reprimir la disidencia, a menudo dirigida contra personas con vínculos con Ucrania.

13. Las condenas en virtud del artículo 275.1 pasaron de 3 en 2023 a 48 en 2024, con otras 25 en julio de 2025, lo que demuestra su rápida normalización como herramienta de represión política. En agosto de 2024, el ciudadano con doble nacionalidad rusa y ucraniana Pyotr Opalnik fue condenado a ocho años, exclusivamente por mantener una conversación privada con un familiar sobre una citación militar para la movilización, a quien supuestamente trató de persuadir para que se rindiera.

14. La base probatoria en estas causas es sumamente deficiente. Los tribunales admiten como pruebas mensajes privados, conversaciones y publicaciones en los medios sociales. El umbral para el enjuiciamiento es bajo, la intención se infiere en lugar de demostrarse, los acusados a menudo desconocen que sus acciones podrían ser tipificadas como delito y las autoridades recurren a la vigilancia digital y la inducción delictiva para sustentar las causas.

Espionaje

15. El artículo 276, relativo al espionaje, fue modificado para ampliar su alcance como instrumento de represión política tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación de Rusia. En julio de 2022, el delito de espionaje se amplió para incluir la recopilación, transferencia o almacenamiento de información para su uso contra las fuerzas rusas, independientemente de su clasificación[9], lo que permite la interpretación y el enjuiciamiento más amplios posibles de actividades legítimas, como el periodismo.

16. La aplicación del artículo 276 se expandió rápidamente, pasando de cero causas en 2022 a 69 en 2023 (84 acusados), 60 causas en 2024 (68 acusados) y 30 más en julio de 2025. Entre 2023 y julio de 2025, se registraron 159 causas con 182 personas condenadas, frente a solo cinco en el período 2021-2022. Con frecuencia, los cargos de espionaje se formulan conjuntamente con cargos relacionados con el "terrorismo" para imponer penas más severas.

17. Entre las personas procesadas figuran disidentes rusos y ciudadanos ucranianos, por acciones como compartir información en los medios sociales o ponerse en contacto con familiares en Ucrania. En enero de 2025, el ciudadano ucraniano Ivan Zabavsky fue condenado a 11 años de prisión en un juicio a puerta cerrada, tras ser detenido por fuerzas rusas en la región de Khárkiv, ocupada por Rusia, mientras buscaba a su madre desaparecida. Zabavsky denunció haber sido torturado para obtener confesiones que lo incriminaran en la transferencia de información a los servicios de seguridad ucranianos. En junio de 2024, Yulia Koveshnikova fue condenada a 13 años de prisión por presuntamente haber compartido información con su esposo, un soldado ucraniano. Ninguno de los dos tenía acceso a secretos de Estado.

[7] Ley Federal núm. 260-FZ, de 14 de julio de 2024.
[8] Ley Federal núm. 510-FZ, de 28 de diciembre de 2024.
[9] Ley Federal núm. 260-FZ, de 14 de julio de 2022.

Ayudar al enemigo

18. El artículo 276.1, introducido en diciembre de 2024 como una disposición más del arsenal represivo de la Federación de Rusia, tipifica como delito la prestación de "ayuda financiera, material-técnica o de otro tipo a un enemigo". Va dirigida contra ciudadanos no rusos e impone penas de 10 a 15 años de prisión.

Secretos de Estado

19. El artículo 283 tipifica como delito "la revelación de secretos de Estado" por parte de cualquier persona que posea información clasificada. Desde 2022 se han ido añadiendo nuevas disposiciones, como el artículo 283.2 sobre "violaciones de la protección de secretos de Estado", que a menudo se utiliza para castigar los viajes al extranjero no autorizados de quienes tienen acceso a secretos de Estado. Aunque los enjuiciamientos en virtud del artículo 283 siguen limitándose en gran medida a los empleados del Estado y al personal militar, el número de condenas creció de 66 en 2022 a 74 en 2024. En cambio, el número de condenas en virtud del artículo 283.2 ha aumentado rápidamente, pasando de 70 en 2023 a 130 en 2024.

Otros abusos de la legislación relacionada con la seguridad nacional para reprimir la disidencia

20. En 2022, las autoridades rusas introdujeron nuevas disposiciones de "censura de guerra", entre ellas el artículo 207.3 del Código Penal sobre "noticias falsas" y el artículo 280.3 sobre "desacreditación" de las fuerzas armadas rusas[10], que penalizan la disidencia y la información relacionada con la guerra[11]. Estas disposiciones han dado lugar a procesamientos como la condena, en febrero de 2024, a dos años y medio de prisión del copresidente de la organización de derechos humanos Memorial, Oleg Orlov, por "desacreditar" al ejército en un ensayo contra la guerra en 2022[12]. También en 2024 se introdujeron los artículos 284.2, sobre la "promoción de sanciones", y 284.3, sobre la "asistencia en la aplicación de decisiones adoptadas por autoridades estatales extranjeras u organizaciones internacionales en las que la Federación de Rusia no es parte", que amplían aún más los instrumentos de represión mediante una redacción imprecisa y un amplio alcance[13].

21. En 2022, el etiquetado de "organizaciones indeseables"[14] pasó de dirigirse a determinadas organizaciones extranjeras —en febrero de 2022 había 50 organizaciones en la lista— a convertirse en un instrumento generalizado para suprimir medios de comunicación independientes, destacadas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, instituciones educativas de prestigio mundial e incluso actores humanitarios[15]. Para agosto de 2025, 258 organizaciones habían sido designadas como "indeseables", con la prohibición de sus operaciones y la criminalización de cualquier vínculo con ellas dentro de la Federación de Rusia y fuera de ella.[16]. En mayo de 2025, Grigory Melkonyants, copresidente del movimiento

[10] Leyes Federales núm. 31-FZ, y núm. 32-FZ, de 4 de marzo de 2022.

[11] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Novaya Gazeta et Al. v. Russia,* demandas núms. 35023/13 y 25657/15, sentencia, 10 de enero de 2023.

[12] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/04/russia-oleg-orlov-trial-abuse-legal-system-political-purposes-says-un-expert.

[13] A/HRC/57/59, párrs. 79 a 80.

[14] Ley federal núm. 129-FZ, de 3 de junio de 2015.

[15] Véase la comunicación RUS 6/2024, disponible en https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29248.

[16] https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/. Para acceder a este sitio web desde fuera de la Federación de Rusia es necesario utilizar una red privada virtual (VPN).

de vigilancia electoral Golos, fue condenado a cinco años de prisión acusado de organizar actividades de una "organización indeseable"[17].

22. El artículo 282 del Código Penal, relativo al "discurso de odio" y a actos que "humillen la dignidad de personas o grupos protegidos", se ha utilizado para perseguir a disidentes, especialmente por publicaciones o comentarios en los medios sociales críticos con funcionarios del Gobierno. Las enmiendas al artículo introducidas en junio de 2025 ampliaron la lista de circunstancias agravantes por las que los delincuentes sin antecedentes pueden ser enjuiciados[18]para incluir la "incitación o la justificación de la violencia", lo que aumenta el riesgo de enjuiciamientos por motivos políticos para eliminar el discurso crítico con el Estado[19].

23. En virtud del artículo 282, las autoridades rusas clasifican a los funcionarios del Estado, soldados y mercenarios como "personas o grupos protegidos", y utilizan esta disposición para enjuiciar todo discurso crítico con ellos. Los poetas Artyom Kamardin y Yegor Shtovba fueron condenados respectivamente a siete y a cinco años y medio de prisión en virtud de ese artículo y del artículo 280.4 relativo a "llamamientos a actuar contra la seguridad del Estado" por recitar en público sus poemas contra la guerra en septiembre de 2022. Kamardin declaró ante el tribunal que había sido torturado, e incluso fue objeto de violación en grupo por dos agentes de policía en el momento de su detención, pero hasta la fecha no se ha iniciado ninguna causa penal por su tortura[20].

24. El artículo 354.1 relativo a la "rehabilitación del nazismo", originalmente destinado a tipificar como delitos la negación y glorificación de los crímenes nazis, se ha ampliado para incluir conceptos vagos como la "falta de respeto" a los símbolos de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial o el cuestionamiento de las narrativas históricas aprobadas por el Estado, distorsionando la verdad histórica sobre los crímenes estalinistas y de la era soviética. Desde 2022, se ha utilizado cada vez más para silenciar la disidencia y enjuiciar a los críticos de la guerra y de la narrativa histórica oficial. Solo en 2024 se iniciaron unos 55 procesos penales con arreglo a este artículo.

B. Abuso de la legislación de seguridad pública

Terrorismo

25. El marco jurídico ruso en materia de lucha contra el terrorismo está compuesto por la ley federal de 2006 "sobre la lucha contra el terrorismo"[21], decretos presidenciales[22], varios artículos del Código Penal en su capítulo 24 sobre "delitos contra la seguridad pública" y disposiciones del Código de Infracciones Administrativas.

26. La definición de terrorismo en la legislación rusa se ajusta en parte a las resoluciones del Consejo de Seguridad y a las normas internacionales; no obstante, la inclusión de términos ambiguos por parte de la Federación de Rusia extiende el

[17] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/un-expert-calls-accountability-and-justice-two-years-after-russias-invasion.
[18] Ley Federal núm. 173-FZ, de 24 de junio de 2025.
[19] Comunicación presentada por la organización rusa de derechos humanos SOVA Centre.
[20] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/01/russia-un-expert-calls-poets-jailed-free-speech-clampdown-be-freed.
[21] Ley Federal núm. 35-FZ, de 6 de marzo de 2006.
[22] Decretos Presidenciales núm. 116, de 15 de febrero de 2006, y núm. 683, de 31 de diciembre de 2015.

ámbito de castigo más allá de comportamientos de naturaleza terrorista, y se aplica para sancionar el ejercicio legítimo de los derechos humanos[23].

27. Desde febrero de 2022, los cargos de terrorismo se han multiplicado por seis, debido al enjuiciamiento desproporcionado de actos de "gamberrismo" o "vandalismo" como terrorismo. Los incendios provocados contra comisarías militares, los intentos de dañar infraestructuras ferroviarias y otras acciones contra la guerra o de apoyo a Ucrania son procesadas como delitos de terrorismo.

28. El artículo 205.2, relativo a la "apología o propaganda del terrorismo", es la disposición más utilizada en materia de lucha contra el terrorismo, que tipifica como delito la expresión incluso cuando no existe intención ni conducta violenta. El número de enjuiciamientos pasó de 220 en 2021 a 549 en 2024, y a 373 a principios de julio de 2025. Muchas de estas causas implican a niños y jóvenes.

29. Los artículos 205.4 y 205.5 tipifican como delito la participación en "comunidades terroristas" y en "organizaciones terroristas", respectivamente. En la práctica, las condenas suelen ofrecer escasas pruebas de que los acusados supongan una amenaza de acciones violentas y, en cambio, se utilizan para actuar contra organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas o minoritarias.

30. El artículo 205.6, que tipifica como delito la "omisión de denuncia de delitos relacionados con el terrorismo", fue ampliado en abril de 2025 para incluir los delitos de "sabotaje" de los artículos 281 a 281.3 en la lista de actos cuya denuncia es obligatoria. Esta ampliación entraña el riesgo de un aumento de los enjuiciamientos, que han alcanzado una media de 80 condenas anuales desde 2022.

31. La ley federal de lucha contra el terrorismo de 2006 de la Federación de Rusia otorga al Servicio Federal de Seguridad facultades excepcionales cuando se declara una operación antiterrorista, eximiéndolo de supervisión externa, lo que aumenta el riesgo de tortura y fomenta la impunidad[24].

Extremismo

32. La ley "sobre la lucha contra la actividad extremista"[25] junto con el Código de Infracciones Administrativas y las disposiciones del Código Penal, constituye el marco jurídico para tipificar el "extremismo" como delito, definido como una conducta prohibida, incluidas determinadas formas de expresión y símbolos, sin vínculos claros con la "violencia", tal y como establecen el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

33. El artículo 280 del Código Penal, relativo a los "llamamientos públicos a la actividad extremista", se aplica principalmente para enjuiciar la disidencia contra la guerra, y más del 90 % de las causas van dirigidas a las actividades en línea. Las declaraciones objeto de enjuiciamiento suelen ser de carácter emocional o simbólico, e incluyen grafitis y consignas como "¡Derrocad a Putin! ¡Detened la guerra!".

34. A menudo, los fiscales acumulan cargos combinando el artículo 280 con el artículo 205.2, sobre la "apología del terrorismo", para endurecer las penas e intensificar el efecto disuasorio en la sociedad. Esto crea un solapamiento explícito entre los marcos de lucha contra el terrorismo y contra el extremismo, que hace imposible distinguir entre ellos.

[23] Véase comunicación RUS 26/2023, disponible en https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28580.

[24] Ley Federal núm. 35-FZ, de 6 de marzo de 2006.

[25] Ley Federal núm. 114-FZ, de 25 de julio de 2002.

35. Desde 2022, los artículos 282.1 a 282.3, que tipifican como delito la organización de "una comunidad extremista" o la "actividad de una organización extremista" y la participación en una entidad "extremista" o su financiación, se han utilizado ampliamente contra las minorías, la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil.

36. En abril de 2025, la legislación amplió significativamente el alcance de los juicios en rebeldía para incluir delitos relacionados con el "extremismo" y el "terrorismo", lo que ha permitido extender el alcance represivo de la Federación de Rusia a los disidentes en el exilio[26]. En 2024, el periodista Alexander Nevzorov y su esposa fueron declarados "comunidad extremista" a través de una sentencia judicial dictada en rebeldía.

37. Las enmiendas legislativas de julio de 2025 sobre "extremismo" permiten calificar de "extremista" a cualquier grupo si uno de sus miembros es condenado con arreglo al artículo 282.1 del Código Penal relativo a la "organización y participación en una comunidad extremista"[27]. Otras enmiendas de 2025 tipifican como delito la búsqueda en línea de "material extremista", incluido el uso de redes privadas virtuales, lo que amplía significativamente el castigo basado en la vigilancia y los instrumentos jurídicos de represión[28].

IV. Violaciones de los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional

Listas de "terroristas" y "extremistas"

38. La Federación de Rusia mantiene varios registros en el marco de la lucha contra el terrorismo y el extremismo, a saber, la "lista federal unificada de organizaciones terroristas" del Servicio Federal de Seguridad, la "lista de organizaciones extremistas" del Ministerio de Justicia y la "lista de terroristas y extremistas" del Rosfinmonitoring, que incluye nombres de organizaciones y de personas. La inclusión en estas tres listas conlleva una serie de derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de circulación, de asociación y de expresión, a los derechos a la privacidad, la propiedad, la salud, el debido proceso y la vida familiar, y a los derechos sociales y económicos, incluido el derecho al trabajo.

39. En agosto de 2025, la "lista federal unificada de organizaciones terroristas" incluía 69 organizaciones; sin embargo, la Federación de Rusia había retirado a los talibanes de la lista en abril de 2025, tras haber aprobado un año antes una ley que autorizaba su retirada. Ese mismo mes, la "lista de organizaciones extremistas" incluía 123 entradas, mientras que la "lista de terroristas y extremistas", con mucho la más extensa, incluía a 18.261 personas, entre ellas más de 150 niños, y 819 organizaciones. Esa lista ha aumentado rápidamente: 1.607 personas fueron incluidas en 2022, 1.828 en 2023 y 3.152 en 2024.

40. Las enmiendas introducidas en la ley en diciembre de 2024 ampliaron los criterios para la inclusión en la "lista de terroristas y extremistas"[29]. La designación permite a las autoridades rusas congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, prohibir las operaciones inmobiliarias y la enseñanza a los niños, y suele dar lugar a un deterioro de la reputación, el cierre de cuentas bancarias y la pérdida de acceso a servicios financieros prestados por bancos privados en el extranjero.

[26] Ley Federal núm 101-FZ, de 21 de abril de 2025.
[27] Ley Federal núm. 216-FZ, de 23 de julio de 2025.
[28] Ley Federal núm. 281-FZ, de 31 de julio de 2025.
[29] Ley Federal núm. 522-FZ, de 28 de diciembre de 2024.

Tortura para obtener confesiones

41. El uso de la tortura, en particular para obtener confesiones o como castigo, sigue siendo generalizado y sistemático en la Federación de Rusia[30] y ha sido especialmente frecuente en las investigaciones sobre seguridad nacional desde 2022[31]. Los tribunales aceptan de manera sistemática pruebas obtenidas mediante tortura y no garantizan una investigación eficaz de las denuncias creíbles de tortura.

42. En octubre de 2024, Svetlana Savelyeva fue detenida arbitrariamente en la frontera de la región de Kursk, cuando intentaba cruzar a Ucrania para reunirse con su pareja. Fue sometida a detenciones administrativas en "carrusel" y llevada por agentes del Servicio Federal de Seguridad a habitaciones de hotel y a una casa particular donde, durante dos meses, fue torturada, por ejemplo mediante palizas, estrangulamiento, descargas eléctricas, humillaciones, amenazas de muerte y amenazas de violencia sexual, para obligarla a confesar. En diciembre de 2024 fue acusada de "traición" por presuntamente intentar alistarse en las fuerzas armadas ucranianas.

43. En febrero de 2025, los hermanos Matvey y Timofey Melnikov fueron condenados a 20 y 19 años de prisión, respectivamente, acusados de "intento de sabotaje", "traición" y participación en una "organización terrorista", en relación con un presunto plan para filmar un incendio provocado en una instalación militar. Durante la prisión preventiva, Timofey Melnikov fue sometido a tortura sexualizada centrada en su trastorno genético congénito, que incluyó golpes reiterados en los genitales con un martillo, quemaduras con un soplete y amenazas de castración, además de fuertes palizas y descargas eléctricas. Se le negó atención médica y fue obligado a confesar bajo la amenaza de atentar contra la vida de su padre.

44. Tras el atentado terrorista cometido en marzo de 2024 contra el Crocus City Hall de Moscú, reivindicado por el Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán, la televisión nacional difundió videos en los que se mostraba cómo se torturaba a los sospechosos, por ejemplo uno en que se les aplicaban descargas eléctricas en los genitales y otro en el que se les cortaba el lóbulo de la oreja. Los sospechosos comparecieron ante el tribunal con signos visibles de tortura, que el juez ignoró[32].

45. En agosto de 2025, el Gobierno de la Federación de Rusia inició el proceso de retirada del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, tras negarse a cooperar con su mecanismo desde 2022, con lo que se redujo todavía más el control internacional sobre el trato dispensado a las personas detenidas y sobre la tortura.

Inducción al delito

46. Desde 2022, las fuerzas del orden han recurrido a provocaciones, mediante las cuales los agentes del Servicio Federal de Seguridad se hacen pasar por miembros de organizaciones prohibidas e inducen a personas a cometer actos incriminatorios, la mayoría de las veces declaraciones contra la guerra. Muchas causas se refieren al reclutamiento o la expresión de apoyo a los batallones de voluntarios rusos que combaten en Ucrania. En abril de 2024, Alexander Matkheev fue condenado a diez años por "traición", "apología del terrorismo" y "participación en una organización prohibida", después de que un agente encubierto, que se hacía pasar por reclutador de la Legión Libertad de Rusia —una unidad militar de rusos que luchan del lado de

[30] A/79/508.
[31] Véase *ibid.* y A/HRC/60/59.
[32] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/un-experts-condemn-terrorist-attack-russian-concert-hall.

Ucrania— se pusiera en contacto con él en línea y lo animara a exhibir sus símbolos, comprar camuflaje y viajar a Kazajstán.

Represalias contra familiares de disidentes

47. Los familiares de disidentes y figuras de la oposición son procesados cada vez con más frecuencia por acusaciones falsas. El hermano de Aléxei Navalny, Oleg, fue condenado a prisión en 2014 y 2022; los padres de Ivan Zhdanov y Leonid Volkov, asociados de Navalny vinculados a la Fundación Anticorrupción, enfrentaron cargos de extremismo; en Bashkortostán, el hermano del disidente exiliado Ruslan Gabbasov está encarcelado por cargos de terrorismo, mientras que el propio Gabbasov es buscado por extremismo; y en Chechenia, Zarema Musaeva, gravemente enferma, recibió una pena adicional de casi cuatro años como castigo por las actividades de oposición de sus dos hijos[33].

Ataque contra niños

48. La persecución de niños con cargos relacionados con la seguridad nacional, sobre la base de declaraciones contra la guerra y disidencia, dio lugar a la inclusión de más de 150 niños en la "lista federal de terroristas y extremistas" en julio de 2025, de los cuales alrededor del 80 % ya habían sido condenados o eran sospechosos en causas de terrorismo en curso.

49. Arseny Turbin, de 15 años, fue condenado en junio de 2024 a cinco años de prisión por cargos de "terrorismo", con acusaciones infundadas de pertenecer a la Legión Libertad de Rusia, en virtud del artículo 205.5. Ha sido torturado y amenazado de violación durante su estancia en el centro de prisión preventiva SIZO-5 de Moscú.

50. En noviembre de 2023, una niña de 14 años fue acusada de "terrorismo" e "intento de asesinato" por publicar un video con petardos en un canal en los medios sociales asociado al "movimiento Columbine", relacionado con los tiroteos en las escuelas, que está prohibido en la Federación de Rusia como organización terrorista. En prisión preventiva, fue violada en grupo en repetidas ocasiones por sus compañeras de celda, con la complicidad y aquiescencia de las autoridades penitenciarias, lo que la llevó a intentar suicidarse.

Riesgos para activistas exiliados

51. Los activistas rusos exiliados acusados de delitos contra la seguridad nacional siguen enfrentando un mayor riesgo, incluido el retorno forzoso a la Federación de Rusia en violación del principio de no devolución.

52. En 2022, Alexei Rozhkov lanzó un cóctel molotov contra una oficina de reclutamiento militar y concedió entrevistas sobre ello, después huyó a Kirguistán, pero en 2023 fue devuelto por la fuerza a la Federación de Rusia y torturado, entre otras formas con descargas eléctricas, para obtener una confesión. En mayo de 2025 recibió una pena de 16 años de prisión por "terrorismo" y "difusión de noticias falsas".

53. En abril de 2025, las autoridades rusas emitieron órdenes de detención y solicitaron la extradición de los colaboradores de Navalny, Dmitry Nizovtsev, Ruslan Shaveddinov y Nina Volokhonskaya, acusándolos de delitos relacionados con el "extremismo" y otras infracciones de motivación política, y llamándolos "traidores de la patria".

[33] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2023/07/russia-un-experts-dismayed-violent-attack-against-journalist-yelena.

A. Violaciones de las garantías de un juicio justo

Aplicación retroactiva de la ley

54. La aplicación retroactiva de la ley por los tribunales se ha convertido en una práctica habitual, y se castiga a las personas por actos que no estaban tipificados como delito en el momento de su comisión. En 2024, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia confirmó la criminalización de la publicación de material calificado posteriormente de extremista, avalando la responsabilidad *ex post facto*. La causa se refería a la exdiputada municipal de Moscú Elena Selkova, multada por publicaciones en los medios sociales vinculadas a la Fundación Anticorrupción de Aléxei Navalny antes de que esta fuera calificada de "extremista" en 2021.

Acceso a los abogados y ataques contra ellos

55. Cada vez son más numerosos los causas en que se enjuicia penalmente a los abogados, se les imponen restricciones a los viajes y se les intimida, especialmente cuando intervienen en causas políticamente delicadas o relacionadas con secretos de Estado, activismo contra la guerra o figuras de la oposición. Los abogados defensores en causas relacionadas con la seguridad nacional deben firmar acuerdos de confidencialidad bajo riesgo de responsabilidad penal, y su acceso a los acusados puede verse restringido, menoscabando así la confidencialidad entre cliente y abogado.

56. En 2021, el abogado defensor Ivan Pavlov fue acusado de "revelar información" relativa a la investigación en la causa de traición por motivos políticos contra el periodista Ivan Safronov, a pesar de que Pavlov no había firmado el acuerdo de confidencialidad. Pavlov abandonó la Federación de Rusia, mientras que otro abogado de la causa Safronov, Dmitry Talantov[34], fue condenado a siete años de prisión en noviembre de 2024, por cargos de difundir "noticias falsas" e "incitación al odio" por comentarios sobre la matanza de Bucha y en represalia por defender a Safronov.

57. Los acuerdos de confidencialidad limitan el escrutinio público, ya que en la práctica se prohíbe a los abogados defensores interactuar con los medios de comunicación, consultar a expertos, solicitar diligencias o entrevistar a testigos. Hasta mayo de 2024, se había impedido a 200 abogados que trabajaban en secretos de Estado salir de la Federación de Rusia[35]debido a enmiendas a la ley federal "sobre secretos de Estado"[36].

58. En mayo de 2025, la abogada Maria Bontsler, de 64 años y residente en Kaliningrado, fue detenida acusada de "cooperación confidencial con un Estado extranjero" en represalia por su labor en materia de derechos humanos. La Sra. Bontsler defendió a clientes en causas políticamente delicadas, entre ellos el activista de derechos humanos Igor Baryshnikov. Se le denegó el acceso al abogado de su elección y se le asignó un abogado de oficio que se negaba a comunicarse con su familia o su equipo jurídico[37].

59. Cada vez es más frecuente el enjuiciamiento de los abogados defensores por su labor legítima como supuestos cómplices de los delitos imputados a sus clientes. En enero de 2025, tres de los abogados de Aléxei Navalny, Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin, fueron condenados a cinco años y medio, cinco años, y tres años y medio, respectivamente, por transmitir información a su familia y a sus partidarios,

[34] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/russia-un-special-rapporteur-urges-acquittal-russian-lawyer-dmitry-talantov.

[35] Información de la organización de derechos humanos First Department.

[36] Ley Federal núm. 432-FZ, de 4 de agosto de 2023.

[37] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2025/07/russia-must-release-ill-lawyer-maria-bontsler-detained-retaliation-human.

siendo que esta acción se ajusta a la labor de representación legal. En febrero de 2024, otros dos abogados de Navalny, Alexander Fedulov y Olga Mikhailova, fueron detenidos en rebeldía e incluidos en una lista de personas buscadas por los mismos cargos[38].

60. En agosto de 2024, el Tribunal Supremo confirmó la condena de prisión contra Bakhrom Khamroyev a 13 años y nueve meses de prisión por cargos de "terrorismo" en represalia por haber defendido a personas acusadas de estar afiliadas a Hizb ut-Tahrir. Desde su detención, ha sido torturado y se le ha negado atención médica esencial, por lo que su salud se ha deteriorado considerablemente.

Detenciones en "Carrusel"

61. La táctica de someter a las personas a un ciclo de detenciones administrativas consecutivas se aplica habitualmente como precursora de cargos inventados en materia de seguridad nacional[39]. En diciembre de 2023, Danil Efimov, de 17 años, fue detenido en el aeropuerto de Volgogrado por hacer donaciones a un fondo de beneficencia ucraniano. Fue sometido a sucesivas detenciones administrativas en "carrusel", torturado y amenazado de muerte para obligarlo a confesar un delito de traición. En julio de 2024, fue condenado a 12 años de prisión en un juicio a puerta cerrada.

Utilización de tribunales militares y juicios a puerta cerrada

62. Las causas de "traición" y "terrorismo", así como algunas relacionadas con el "extremismo", son tramitadas por tribunales militares, a pesar de que la gran mayoría de los acusados son civiles, entre ellos activistas contra la guerra juzgados por "apología del terrorismo". Los juicios a puerta cerrada, tanto militares como civiles, obstaculizan el escrutinio público, en particular en causas de motivación política, y especialmente cuando los equipos de defensa están sujetos a obligaciones de confidencialidad.

Requisitos probatorios

63. Los requisitos probatorios en los casos de seguridad nacional, "extremismo" y "terrorismo" en la Federación de Rusia se ven debilitados por la obligación de basarse en evaluaciones de expertos, normalmente evaluaciones lingüísticas de expertos designados por el Estado que carecen de independencia o cualificaciones, como incluso reconoció el Ministerio de Justicia en relación con un experto en la causa contra Vladimir Kara-Murza que también intervino en múltiples causas. No obstante, estos informes siguen sirviendo de base para las condenas. En el último juicio del exdiputado municipal Alexei Gorinov, en 2024, en el primer peritaje realizado por expertos universitarios independientes no se hallaron indicios de "apología del terrorismo" en las declaraciones de Gorinov, por lo que la fiscalía solicitó otro análisis por parte de expertos del Ministerio de Justicia para obtener las conclusiones deseadas[40].

64. El uso de testigos secretos en causas de "extremismo" y "terrorismo" también se ha convertido en práctica habitual, especialmente en las condenas por motivos políticos debido a la afiliación con Hizb ut-Tahrir[41].

---

[38] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/russia-special-rapporteur-appalled-prison-sentences-punish-navalny-lawyers.

[39] A/HRC/54/54, párr. 93.

[40] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/12/russia-special-rapporteur-reiterates-call-immediate-release-alexei-gorinov.

[41] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Nemtsova et Al. v. Russia, demanda núm. 38891/08, sentencia, 22 de septiembre de 2020.

V. Principales grupos sometidos a medidas represivas

65. La Relatora Especial considera que el abuso deliberado y sistemático de la legislación sobre seguridad nacional, extremismo y terrorismo para silenciar la disidencia y desmantelar la sociedad civil independiente refleja una estrategia calculada explícitamente concebida para perseguir y marginar a grupos específicos dentro de la Federación de Rusia.

Defensores de los derechos humanos

66. En 2024, se inició un proceso penal contra Alexei Sokolov, director de la organización de vigilancia de centros penitenciarios "Legal Basis", por mostrar repetidamente el logotipo de Facebook[42]. Esto se produjo tras una decisión judicial de marzo de 2022 por la que se declaraba a Meta "extremista" por negarse a imponer censura en relación con la guerra.

67. En abril de 2025, Ivan Surov, un activista de vigilancia electoral de Tula, fue condenado a 12,5 años de prisión acusado de "traición" por una supuesta donación a un fondo de apoyo al ejército ucraniano. El procesamiento parece estar relacionado con su participación en la vigilancia electoral y la presentación de una denuncia por fraude electoral.

68. En junio de 2025, un tribunal militar de Yuzhno-Sajalinsk condenó al defensor de los derechos humanos de 85 años, Mark Kuperman, por cargos de "llamamientos a la actividad terrorista" en relación con un proyecto de documento sobre reformas democráticas en la Federación de Rusia que Kuperman supuestamente había compartido con colegas en enero de 2023. Kuperman fue multado con 500.000 rublos (6.000 dólares).

69. En julio de 2025, se inició un proceso penal por "traición" contra Pavel Andreev, fundador del "Revolt Centre" de Syktyvkar y del medio de comunicación 7x7, que dio lugar a registros generalizados en las sedes de periodistas y defensores de los derechos humanos en 12 regiones. Se le acusa de contactos encubiertos con representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y organizaciones de inteligencia extranjeras, sin especificar la naturaleza de dichas actividades[43].

70. En agosto de 2025, el defensor de los derechos humanos exiliado Sergei Davidis fue condenado en rebeldía a seis años de prisión por "apología del terrorismo", por volver a publicar la declaración de Memorial en la que se reconocía como presos políticos a 22 miembros encarcelados del batallón Azov de Ucrania, designado como "terrorista" en la Federación de Rusia.

Opositores políticos

Persecución de Aléxei Navalny, de sus asociados y partidarios

71. Aléxei Navalny se enfrentó a numerosas actuaciones penales por motivos políticos. Su condena en agosto de 2023 a 19 años de prisión por cargos de "extremismo" fue confirmada a título póstumo por el Tribunal Supremo en julio de 2024. Rosfinmonitoring se negó a retirar a Navalny de su "lista de terroristas y extremistas".

[42] Véase www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2025/01/russia-must-drop-charges-against-human-rights-defender-alexey.

[43] Información de la organización de derechos humanos OVD-Info.

72. En junio de 2025, las memorias de Navalny, *Patriot*, en las que relataba su vida, incluido su encarcelamiento en la prisión del Ártico donde murió en febrero de 2024, fueron declaradas "extremistas" por decisión judicial[44].

73. En junio de 2021, las organizaciones de Navalny —la Fundación Anticorrupción, la Fundación para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos y sus oficinas regionales de campaña— fueron prohibidas como "extremistas". Entre 2021 y 2025, los tribunales rusos responsabilizaron al menos a 156 personas por el uso de "símbolos extremistas" asociados al nombre de Navalny e incluso a su fotografía. De ellas, 104 fueron multadas y 52 sometidas a detenciones administrativas. El activista de Mari El Sergei Mamaev ha sido acusado, en virtud del artículo 282.4, de "demostración reiterada de símbolos extremistas", entre ellos el uso de una camiseta con la inscripción "Libertad para Navalny".

74. Al menos 45 personas han sido acusadas en virtud del artículo 282.1 del Código Penal sobre "organización de una comunidad extremista o participación en tal comunidad" por su afiliación a las organizaciones de Navalny, y al menos 5 en virtud del artículo 282.2 párr. 2) sobre "participación en una organización extremista". Al menos 13 permanecen en prisión, entre ellos abogados y periodistas independientes, con condenas de hasta 12 años. En junio de 2025, el colaborador de Navalny, Leonid Volkov, fue condenado en rebeldía a 18 años de prisión por múltiples cargos, entre ellos "extremismo" y "apología del terrorismo".

75. Aumentó el número de causas penales por apoyo financiero a la Fundación Anticorrupción. En los primeros siete meses de 2025 se iniciaron 76 causas y al menos 23 personas fueron condenadas a penas de prisión.

76. En una de esas causas, la policía golpeó al activista Alexei Maliarevsky para acceder a su teléfono inteligente y obtener pruebas de donaciones a la Fundación Anticorrupción, por lo que fue condenado a siete años de prisión en abril de 2024. En junio de 2025, el tribunal de apelación confirmó la condena a cuatro años de prisión del cirujano de Moscú Ivan Tishchenko por una donación a la Fundación.

Movimiento "Vesna"

77. En diciembre de 2022, el Tribunal Municipal de San Petersburgo declaró "organización extremista" al movimiento pacífico de jóvenes "Vesna". En agosto de 2025, seis activistas fueron juzgados por "crear una comunidad extremista". Se han presentado cargos adicionales contra miembros de "Vesna" en virtud de artículos como el 354.1, sobre "rehabilitación del nazismo", el 207.3, sobre "noticias falsas" acerca del ejército, y el 280.4, sobre "incitación contra la seguridad del Estado", por publicaciones en los medios sociales críticas con las políticas oficiales y la guerra.

"Asociación Cívica de Omsk"

78. La Asociación Cívica de Omsk, fundada en 2021, reúne a partidarios de Navalny y activistas ambientales y LGBT de la región de Omsk. Su labor incluye documentar bajas de guerra y brindar asistencia a los activistas en riesgo. Fue designada "agente extranjero" en julio de 2023 y declarada "organización extremista" en junio de 2024 por motivos infundados. Sus dirigentes huyeron de la Federación de Rusia por temor a ser perseguidos, y sus documentos de identidad rusos fueron anulados, lo que les impidió ejercer cualquier actividad legal en el país.

[44] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/russia-un-experts-call-accountability-navalnys-death-and-immediate-release.

Otras figuras de la oposición

79. En abril de 2025, el Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años impuesta a Alexei Gorinov, quien ya cumplía una pena de siete años de prisión por difundir "noticias falsas" sobre el ejército al condenar públicamente el asesinato de niños en Ucrania, esta vez bajo cargos de "apología del terrorismo" a raíz de una supuesta conversación con otros reclusos sobre la guerra[45].

80. En febrero de 2024, el político exiliado Gennady Gudkov fue incluido en la "lista de terroristas y extremistas", y su hijo Dmitry fue acusado en rebeldía de difundir "noticias falsas" sobre el ejército. Asimismo, en 2024, el gran maestro de ajedrez y opositor ruso Garry Kasparov fue añadido a la "lista de terroristas y extremistas", mientras que dos organizaciones de las que fue cofundador, el Comité Ruso contra la Guerra y el Foro Rusia Libre, una conferencia bianual de la oposición rusa, fueron designadas "indeseables" en 2023.

81. En abril de 2023, el político de la oposición Vladimir Kara-Murza fue condenado a 25 años de prisión por cargos de "traición", "noticias falsas" sobre el ejército y afiliación a "organizaciones indeseables" por sus declaraciones críticas con el Gobierno y por su oposición a la guerra. Fue liberado en un intercambio de prisioneros en agosto de 2024.

Periodistas y profesionales de los medios de comunicación

82. Desde el inicio de la guerra rusa contra Ucrania, los periodistas se enfrentan cada vez más a procesos judiciales en virtud de las leyes de seguridad nacional y extremismo. Entre julio de 2024 y julio de 2025 se iniciaron al menos ocho nuevas causas penales y 12 periodistas fueron condenados por cargos de "extremismo". Asimismo, se iniciaron nueve causas penales, y siete periodistas fueron condenados en virtud del artículo 205.2, por "llamamientos, o apología, o propaganda del terrorismo"[46].

83. En noviembre de 2024, la periodista Nika Novak fue condenada a cuatro años de prisión en virtud del artículo 275.1 por "cooperación confidencial" con Radio Free Europe/Radio Liberty.

84. En agosto de 2024, el periodista del *Wall Street Journal* Evan Gershkovich, condenado a 16 años de prisión por cargos de "espionaje" infundados, fue liberado en un intercambio de prisioneros que incluyó a la periodista Alsu Kurmasheva, encarcelada por cargos de "agente extranjero", y a otros 14 presos[47].

85. En abril de 2025, cuatro periodistas —Antonina Favorskaya, Artyom Krieger, Konstantin Gabov y Sergey Karelin— fueron condenados a cinco años y medio de prisión, acusados de "extremismo" por su presunta participación en la Fundación Anticorrupción, que incluía la filmación de audiencias judiciales y la documentación del funeral de Navalny.

86. En julio de 2025, la periodista y activista Olga Komleva fue condenada a 12 años de prisión por cargos de "extremismo" relacionados con participación en las oficinas de campaña de Navalny y por difundir "noticias falsas" sobre el ejército. También en julio, la periodista Farida Kurbangaleeva fue condenada en rebeldía por "apología del terrorismo" y difusión de "noticias falsas" sobre el ejército, a raíz de su cobertura de la guerra.

[45] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/12/russia-special-rapporteur-reiterates-call-immediate-release-alexei-gorinov.

[46] Información recibida de la ONG rusa Mass Media Defence Centre.

[47] Véase www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/08/russia-all-remaining-human-rights-defenders-journalists-and-anti.

87. En junio de 2025, el periodista ucraniano Vladyslav Yesypenko fue liberado tras más de cuatro años de detención en la Crimea ocupada por Rusia. Había sido condenado en 2021 por cargos de "espionaje" y "tenencia de explosivos" y declaró ante el tribunal que había sido torturado para obligarlo a confesar.

88. En septiembre de 2023, el periodista daguestaní Abdulmumin Gadjiyev fue condenado a 17 años de prisión por cargos de "terrorismo", presuntamente en represalia por sus reportajes[48].

Personalidades de la cultura y el mundo académico

89. Las autoridades rusas han perseguido cada vez más a científicos y artistas en virtud de leyes de seguridad nacional y extremismo, a menudo centrando la atención en quienes se dedican a la cooperación académica internacional o a la expresión artística crítica de la guerra.

90. En junio de 2023, el Tribunal Municipal de Moscú condenó al físico y profesor Valery Golubkin a 12 años de prisión acusado de "traición" por entregar "material clasificado" a un país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte mientras participaba en un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, pese a que múltiples comisiones de expertos habían confirmado que el material no era secreto de Estado.

91. La directora de teatro Yevgenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petrychuk cumplen largas penas de prisión acusadas de cargos inventados de "apología del terrorismo" por poner en escena una obra galardonada, *Finist, the Brave Falcon*. La verdadera causa de la persecución se deriva de una serie de poemas contra la guerra escritos por Berkovich[49].

92. En julio de 2025, el escritor Boris Akunin fue condenado en rebeldía a 14 años de prisión acusado de "terrorismo" por vulnerar la legislación rusa sobre "agentes extranjeros" debido a su postura contraria a la guerra.

93. En junio de 2025, el fotógrafo Grigory Skvortsov, residente en Perm, fue condenado a 16 años de prisión acusado de "traición" por compartir con un periodista estadounidense un libro sobre búnkeres soviéticos y documentos desclasificados.

94. En abril de 2025, un tribunal de Moscú dictó una orden de detención contra el exiliado Petr Verzilov, antiguo editor de Mediazona y miembro de Pussy Riot, por nuevos cargos de "traición". En 2024, la policía registró al menos 20 domicilios de activistas y artistas en relación con esta causa, y Verzilov fue incluido en la "lista de terroristas y extremistas". En 2023, Verzilov fue condenado en rebeldía por cargos de "censura de guerra".

95. El investigador francés Laurent Vinatier, encarcelado en 2024 por no haberse registrado como "agente extranjero", compareció ante el tribunal en agosto de 2025 por nuevas acusaciones de "espionaje".

Activistas contra la guerra

96. Desde 2022, la mayoría de las causas penales relacionadas con declaraciones contra la guerra se han iniciado en virtud del artículo 205.2 sobre "apología del terrorismo", así como de los artículos 207.3 sobre "noticias falsas" acerca del ejército y 280.3 sobre "desacreditación" del ejército.

[48] Véase https://cpj.org/data/people/abdulmumin-gadzhiev/.

[49] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2024/12/russia-special-rapporteur-urges-acquittal-and-immediate-release-jailed.

97. En julio de 2024, el músico y activista contra la guerra de Birobidzhán, Pavel Kushnir, acusado de “apología del terrorismo” por publicaciones contra la guerra en una cuenta en medios sociales con solo cinco seguidores, murió bajo custodia tras una huelga de hambre en protesta contra la guerra.

98. En noviembre de 2024, Roman Tyurin, residente en Omsk, fue condenado a seis años y medio de prisión por cargos de motivación política, entre ellos “apología del terrorismo”, por publicaciones en los medios sociales contra la guerra.

99. En mayo de 2023, el trabajador de la construcción Daniil Stepanov fue condenado a cuatro años y medio por pintar grafitis contra la guerra, poseer banderas ucranianas y mantener presunta correspondencia con la Legión Libertad de Rusia.

100. En enero de 2024, la pensionista de 72 años Evgenia Mayboroda fue condenada a cinco años y medio de prisión acusada de “llamamientos públicos al extremismo” tras haber compartido dos videos sobre las bajas en Mariúpol y una joven ucraniana que expresaba retórica anti rusa.

101. En septiembre de 2023, el activista civil Richard Rouz fue condenado a ocho años de prisión por difundir “noticias falsas” sobre el ejército y por “apología del terrorismo” a causa de sus publicaciones en los medios sociales, por ejemplo sobre la matanza de Bucha.

102. En junio de 2025, Gennady Artemenko, un ciudadano ruso de etnia ucraniana de 57 años, fue condenado a 18 años de prisión por cargos de “traición” y “terrorismo” basados en acusaciones de actuar por “motivos ideológicos proucranianos”, cuando intentó llegar a Ucrania para evacuar a su anciana madre. Su condena se basó en pruebas falsas y confesiones obtenidas mediante tortura.

Personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero

103. Desde que el Tribunal Supremo designó como “extremista” al “Movimiento Internacional LGBT” en noviembre de 2023, las autoridades han emprendido una campaña coordinada de represión contra las personas y organizaciones LGBT. Esto incluye enjuiciamientos penales en virtud de artículos relacionados con el extremismo, redadas en locales frecuentados por personas LGBT y la persecución de instituciones culturales por distribuir literatura con temática LGBT. Esta designación ha permitido la criminalización de la vida privada, la identidad y la expresión, con cargos que van desde “organización de actividades extremistas” hasta la “exhibición pública de símbolos prohibidos”. Solo en 2024 se acusó al menos a 13 personas, y en 2025 han surgido más casos.

104. En marzo de 2024, las fuerzas del orden llevaron a cabo una redada en el club frecuentado por personas LGBT Pose, en Oremburgo. La administradora del club, Diana Kamilyanova, el director artístico, Alexander Klimov, y el propietario, Vyacheslav Khasanov, fueron detenidos y acusados de “organizar una comunidad extremista”. Estas detenciones formaron parte de una ofensiva más amplia, con al menos 10 personas acusadas tras redadas similares en más de 50 clubes, incluidos los de Chitá, Vorónezh y Kirov.

105. En mayo de 2024, la policía registró el domicilio de Artyom Fokin, presidente de la organización LGBT Irida, con sede en Samara, y lo detuvo por cargos de participación en una “comunidad extremista”. En julio de 2024 fue añadido a la “lista de terroristas y extremistas”.

106. En marzo de 2025, en la región de Ulyanovsk, Ilya Zhuravlyov, director de un centro médico, fue condenado a tres años de prisión por cargos de participación en una “organización extremista” —en relación con el Movimiento Internacional

LGBT— y por acusaciones de promover las relaciones entre personas del mismo sexo como “iniciación a un culto satánico”.

107. El 4 de mayo de 2025 se llevaron a cabo redadas coordinadas en tres editoriales: Individuum, Popcorn Books y Eksmo. Varios empleados fueron detenidos por publicar literatura con temática LGBT y acusados de “organizar las actividades de una organización extremista”.

Minorías religiosas

108. Uno de los grupos religiosos pacíficos más perseguidos en la Federación de Rusia es el de los testigos de Jehová, prohibidos como “organización extremista” por el Tribunal Supremo ruso en 2017. Desde entonces, cientos de personas han sido procesadas por cargos relacionados con el “extremismo”. En julio de 2025, 157 testigos de Jehová seguían encarcelados, entre otros, por celebrar cultos, distribuir literatura religiosa y cantar o hablar sobre su fe. Las penas van desde multas hasta ocho años de prisión, e incluso se detiene a creyentes de edad avanzada y personas con graves problemas de salud.

109. Anna Safronova, condenada a seis años por “extremismo” y recluida en la colonia penal núm. 7 de Zelenokumsk, ha sido sometida a tortura, incluido el confinamiento prolongado en celdas de castigo (régimen de aislamiento individual (SHIZO) y celdas en régimen de aislamiento (PKT)) y se le ha denegado atención médica adecuada desde mayo de 2024. En marzo de 2025, Valery Baylo, que cumplía dos años y medio de condena por “extremismo”, murió en el centro de prisión preventiva SIZO-3 de Novorossiisk, tras negársele el acceso a tratamiento médico.

110. Hizb ut-Tahrir, prohibida en la Federación de Rusia como “organización terrorista” en 2003 a pesar de no haberse verificado actos de violencia por parte de sus miembros, sigue siendo objeto de procesamiento por cargos relacionados con el “terrorismo” en virtud del artículo 205.5, y sus miembros son a menudo acusados en virtud el artículo 278 sobre el “derrocamiento violento del Gobierno” por su mera afiliación al grupo. Los acusados son condenados por asistir a debates o poseer literatura, con penas de 10 a 24 años en prisiones de máxima seguridad.

111. En 2024, al menos dos personas fueron encarceladas y otras cuatro detenidas por su presunta afiliación al movimiento no violento “Nurdzhular”, seguidores del teólogo turco Said Nursi, prohibido como “extremista” en la Federación de Rusia en 2008. También en 2024, al menos 12 personas fueron condenadas por presunta afiliación a Tablighi Jamaat, un movimiento misionero islámico internacional prohibido en la Federación de Rusia como “extremista” desde 2009.

Minorías nacionales y Pueblos Indígenas

112. En junio de 2024, el Tribunal Supremo ruso designó como “extremistas” al inexistente “Movimiento Separatista Antirruso” y a sus 55 presuntos afiliados, y en noviembre de 2024 prohibió como “organización terrorista” al “Foro de las Naciones Libres Posrusas”, junto con sus 172 presuntos afiliados, que incluían organizaciones de Pueblos Indígenas.

113. En junio de 2025, las autoridades rusas incluyeron a la cofundadora de la “Fundación Yakutia Libre”, Sargylana Kondakova, y a Marina Khankhalaeva, fundadora de “Tusgaar Buryad-Mongolia”, en la “lista de terroristas y extremistas”. Ambas organizaciones habían sido catalogadas anteriormente como “extremistas”.

114. En 2023, el “Congreso del Pueblo Calmuco-Oirat” fue prohibido como “organización extremista” en Kalmukia; del mismo modo, en 2022 se prohibió en Tartaristán el “Centro Público de Todos los Tártaros” y en 2020, el movimiento

"Bashkort" en Bashkortostán. En 2016, el Mejlis, órgano representativo de los tártaros de Crimea, fue prohibido en la Crimea ocupada por Rusia en 2016.

115. A los activistas indígenas y de minorías nacionales también se les imputan otros cargos relacionados con la seguridad nacional. En 2023, la activista bashkir Ramila Galim (también conocida como Ramila Saitova) fue condenada a cinco años de prisión en virtud del artículo 280.4 párr. 2) sobre "incitación contra la seguridad del Estado" por una publicación en los medios sociales en la que instaba a los hombres bashkires movilizados a no combatir en Ucrania y a regresar a sus hogares.

Migrantes

116. Según las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, se estima que el número de delitos cometidos por extranjeros, incluidos los migrantes, en la Federación de Rusia representa entre el 2 % y el 4,5 % del número total de delitos. Aunque el nivel de criminalidad entre extranjeros es menor que entre los ciudadanos rusos, el jefe del Comité de Investigación, Alexander Bastrykin, anunció la creación de unidades especializadas para investigar los delitos relacionados con migrantes, refiriéndose a los delitos perpetrados por migrantes como una amenaza para la seguridad del Estado y alegando que cada vez cometen más delitos de terrorismo y extremismo. Bastrykin afirmó que los migrantes cometieron 253 delitos relacionados con el terrorismo en 2024, sin aportar pruebas.

117. En agosto de 2025, un tribunal militar de Moscú inició un juicio a puerta cerrada contra 19 personas, en su mayoría migrantes de Tayikistán, acusadas en relación con el atentado terrorista de 2024 contra el Crocus City Hall. Posteriormente, las autoridades rusas lanzaron una oleada de depuraciones y ataques contra migrantes, que incluyeron redadas policiales, detenciones, torturas y malos tratos, así como deportaciones, sobre todo de tayikos y otras personas procedentes de Asia Central.

118. La nueva estrategia de lucha contra el extremismo de diciembre de 2024 amplió considerablemente las medidas de política, con el objetivo de endurecer las condiciones de residencia de los migrantes y los mecanismos de expulsión, así como de despojar de su nacionalidad a los rusos naturalizados por supuestos de "extremismo" y "terrorismo", incluso en casos en que pudieran quedar en situación de apatridia. En julio de 2025, las autoridades rusas ampliaron los motivos para privar de la nacionalidad más allá de las condenas relacionadas con el "terrorismo" y el "extremismo" para incluir la "cooperación confidencial" y la "asistencia a organizaciones internacionales".

Detención y trato de ucranianos

119. Desde la ocupación ilegal de Crimea por la Federación de Rusia en 2014, las autoridades rusas han iniciado al menos 1.109 causas penales por motivos políticos contra ucranianos, y al menos 924 personas, entre ellas al menos 110 tártaros de Crimea[50], siguen detenidas arbitrariamente, a menudo en estado de salud crítico y privadas de atención médica[51].

120. En 2024, al menos 109 ucranianos fueron condenados por cargos de "terrorismo" por motivos políticos, y se iniciaron 303 nuevas causas. Además, tres ucranianos fueron condenados por cargos relacionados con el "extremismo", y se iniciaron al menos diez nuevas causas.

[50] Comunicación presentada por el Centro de Libertades Civiles.

[51] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2025/02/no-justice-alexei-navalny-and-more-lives-risk-russia-warns-un-special.

Tártaros de Crimea

121. Los tártaros de Crimea han sido procesados en virtud de la legislación rusa sobre terrorismo y extremismo desde 2014. La mayoría han sido condenados por presunta pertenencia a Hizb ut-Tahrir, que, si bien está prohibida como "organización terrorista" en la Federación de Rusia, sigue siendo legal en Ucrania. Son deportados para ser juzgados y cumplen sus condenas en la Federación de Rusia.

122. Emir-Usein Kuku, defensor de los derechos humanos tártaro de Crimea, fue condenado en noviembre de 2019 a 12 años de prisión por organizar actividades de Hizb ut-Tahrir e "intento de toma del poder por la fuerza". Los coacusados en esta causa recibieron penas de entre 7 y 19 años de prisión.

123. En febrero de 2023, el activista tártaro de Crimea Jemil Gafarov, condenado a 13 años de prisión por cargos relacionados con Hizb ut-Tahrir, murió en detención en Novocherkassk, provincia de Rostov, tras denegársele atención médica vital adecuada.

124. Mejit Abdurakhmanov, también condenado a 12 años de prisión por presunta pertenencia a Hizb ut-Tahrir en 2022, ha pasado los últimos 11 meses en SHIZO y PKT, en una colonia penitenciaria de Chuvasia, y se le han denegado las visitas familiares. Su salud se ha deteriorado debido a las condiciones de detención.

125. El acceso a representación letrada independiente sigue siendo un reto, ya que los abogados de la Crimea ocupada se enfrentan a persecución e intimidación. En 2023, la policía allanó el domicilio de Alexei Ladin y lo detuvo por presunta exhibición de "símbolos extremistas" relacionados con el escudo de Ucrania y con un emblema tártaro de Crimea. Un año después fue inhabilitado, convirtiéndose en la cuarta causa de inhabilitación de abogados de Crimea por defender a presos políticos y prisioneros de guerra.

Prisioneros de guerra

126. Las autoridades rusas informaron de que, hasta abril de 2025, se habían dictado condenas contra 579 militares ucranianos, aunque los detalles de sus veredictos siguen sin publicarse. Los juicios se celebran principalmente en la provincia de Rostov y los territorios ocupados, pero también en otras partes de la Federación de Rusia, desde Moscú hasta Sajalín.

127. Las autoridades rusas no reconocen formalmente la condición de prisionero de guerra a los militares ucranianos detenidos, y procesan a muchos de ellos como civiles por cargos relacionados con "terrorismo", negándoles así las protecciones de los Convenios de Ginebra. Los prisioneros de guerra ucranianos suelen ser enjuiciados en virtud de disposiciones relacionadas con el terrorismo por pertenecer a regimientos militares ucranianos declarados "terroristas" por la Federación de Rusia, como Azov, Aidar, el batallón tártaro de Crimea que lleva el nombre de Noman Çelebicihan y los batallones de Donbás.

128. Legalmente, la designación como "organización terrorista" de una organización internacional requiere una sentencia del Tribunal Supremo, y en 2022, los batallones Azov y tártaro de Crimea recibieron esa designación. Sin embargo, desde febrero de 2022, las autoridades han recurrido cada vez más a una elusión legal utilizando el artículo 205.4 sobre "comunidad terrorista", que los tribunales pueden invocar sin una sentencia del Tribunal Supremo si se condena a un miembro de un grupo en virtud de este artículo. Esta disposición se ha aplicado contra miembros de los batallones Aidar y Donbás[52].

[52] Comunicación presentada por la organización rusa de derechos humanos Memorial.

129. En septiembre de 2023, el Tribunal Militar del Distrito Sur condenó a Lyubov Selina a cinco años de prisión y dictaminó que el batallón Aidar era una "comunidad terrorista". El Servicio Federal de Seguridad ha incluido al batallón Aidar en la "Lista Federal Unificada de Organizaciones Terroristas". Se han aplicado medidas similares a miembros de los batallones de Donbás.

130. En 2025, los prisioneros de guerra ucranianos capturados en la región de Kursk fueron acusados de "terrorismo" con arreglo al artículo 205 y de "cruce ilegal de fronteras" con arreglo al artículo 332, sumando 305 penas impuestas a raíz de esos cargos a finales de agosto de 2025.

Detenidos civiles

131. Los civiles ucranianos recluidos en centros de detención rusos también son juzgados sistemáticamente por cargos relacionados con la seguridad nacional y reciben largas penas de prisión, aunque sus confesiones se obtienen mediante tortura[53], como en la causa de Irina Danilovich, torturada para obligarla a confesar de "traición"[54].

132. En diciembre de 2024, tras seis años de desaparición forzada, el tribunal militar de Rostov del Don condenó a tres civiles ucranianos, Sergey Gruzinov, Viktor Shydlovsky y Natalia Vlasova, por cargos de "terrorismo", espionaje e "intento de asesinato", y les impuso penas de hasta 22 años de prisión. Vlasova, en un inusual testimonio público ante el tribunal, describió haber sido desnudada, atada, sometida a descargas eléctricas, violada con una botella y violada en grupo por 15 hombres armados, tras lo cual le limaron los dientes con una lima metálica. A pesar de la gravedad y coherencia de estos testimonios, el tribunal no investigó las denuncias de tortura.

133. Asimismo, en abril de 2025, los "Cinco de Melitópol" —los civiles ucranianos Oleksandr Zhukov, Ihor Horlov, Volodymyr Zuev, Andrii Golubev y Yurii Petrov— fueron condenados por "terrorismo" a penas de hasta 14 años, con confesiones obtenidas mediante tortura.

134. En octubre de 2024, Irina Navalnaya, residente en la Mariúpol ocupada por Rusia (sin relación con Alexéi Navalny), fue condenada a ocho años de prisión por un tribunal militar de Rostov del Don, acusada de "intento de acto terrorista" y "tenencia ilícita de explosivos". Su apellido, unas prácticas de estudiante en una comisaría de Mariúpol y el servicio de su padrastro en el batallón Azov contribuyeron a que fuera objeto de persecución. Se retractó de su confesión ante el tribunal, declarando que había sido torturada con descargas eléctricas y golpeada brutalmente bajo custodia. Bajo tortura, se la obligó a grabar una "confesión" en video, emitida por el canal estatal ruso NTV con el título "Soy la escoria de Zelensky".

VI. Conclusiones y recomendaciones

135. **El abuso de la legislación sobre seguridad nacional y seguridad pública se ha convertido en una herramienta más de represión contra la disidencia, que se ha intensificado desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Desde 2022, los procesamientos han aumentado drásticamente, dirigidos a un amplio abanico de personas, como periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, activistas, personalidades de la cultura y ciudadanos de a pie, por ejercer**

[53] Véase www.ohchr.org/en/press-releases/2025/02/russias-repression-home-and-aggression-against-ukraine-demand-justice-no.

[54] Véase comunicación AL RUS 6/2023, disponible en https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28081.

pacíficamente sus libertades de expresión, de asociación y de reunión, así como por actos lícitos en el desempeño de sus funciones profesionales.

136. **Estas prácticas se ven agravadas por cambios legislativos que amplían el alcance, la gravedad y la vaguedad de los delitos contra la seguridad nacional, apartándose de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad consagrados en el derecho internacional. Así, el artículo 276 del Código Penal ha pasado de ser una disposición de aplicación restringida sobre espionaje a convertirse en un amplio instrumento de control político, con definiciones ampliadas y normas probatorias menos estrictas, lo que lo convierte en una herramienta central en la campaña contra la disidencia, especialmente en el contexto de la guerra contra Ucrania.**

137. **Las disposiciones legales sobre "extremismo" carecen de base en el derecho internacional y violan los derechos humanos cuando generan responsabilidad penal. Después de febrero de 2022, la aplicación agresiva del artículo 280 sobre "extremismo" dio lugar a enjuiciamientos masivos de manifestaciones pacíficas de oposición a la guerra, en particular mediante expresiones difundidas en línea. De manera similar, el marco jurídico ruso en materia de lucha contra el terrorismo es excesivamente amplio y poco preciso y se utiliza indebidamente para criminalizar discursos legítimos y actividades pacíficas y lícitas que expresan disidencia u oposición a la guerra bajo cargos de "apología del terrorismo".**

138. **La aplicación de estas imprecisas y amplias disposiciones legales va acompañada de penas desproporcionadamente severas, con el claro objetivo de infundir miedo y disuadir a otros de ejercer sus derechos y libertades, lo cual está claramente prohibido por los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

139. **El aumento del enjuiciamiento de niños en virtud de las disposiciones sobre terrorismo y traición por actos como distribuir panfletos, expresar disidencia o actos menores de vandalismo es alarmante y refleja un patrón más amplio de enfoque punitivo para infundir miedo y reprimir la disidencia.**

140. **Aunque el uso de la tortura, en particular para obtener confesiones o castigar la disidencia, ya era habitual antes de 2022, se ha intensificado gravemente desde entonces y se ha vuelto generalizado y sistemático, y es especialmente frecuente en investigaciones relacionadas con la seguridad nacional, incluso contra detenidos ucranianos.**

141. **Se observa un uso creciente de la inducción delictiva por parte de las fuerzas del orden y los servicios de seguridad. Se contacta a personas, a menudo en línea o a través de canales encubiertos, y, dado que la mera expresión de desacuerdo basta para ser acusado de "extremismo", se las induce a realizar acciones que luego se utilizan como fundamento para fabricar un proceso judicial.**

142. **Desde que el Tribunal Supremo calificó de "extremista" al "Movimiento Internacional LGBT" en 2023, se ha llevado a cabo una campaña coordinada de represión contra las personas y organizaciones LGBT, que incluye enjuiciamientos penales en virtud de artículos relacionados con el extremismo, redadas en locales frecuentados por personas LGBT, y persecución de instituciones culturales por distribuir literatura con temática LGBT. Del mismo modo, los grupos de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y las minorías son calificados de "extremistas" o "terroristas", con lo que se acallan sus voces y se equipara la defensa pacífica con una amenaza a la seguridad nacional. Los migrantes, en particular los procedentes de Asia Central, son**

objeto de una represión desproporcionada en virtud de las leyes de seguridad nacional, que incluyen la tortura, la detención arbitraria y los castigos colectivos. Al mismo tiempo, los abogados se enfrentan cada vez más a enjuiciamientos penales, restricciones a los viajes e intimidación, especialmente cuando intervienen en causas relacionadas con secretos de Estado, activismo contra la guerra o figuras de la oposición.

143. **En conjunto, estas tendencias ponen de manifiesto el abuso sistemático de los marcos de seguridad nacional y de seguridad pública para criminalizar la disidencia pacífica, erosionar el espacio cívico y reprimir el ejercicio legítimo de los derechos civiles y políticos. La convergencia de una legislación represiva y deliberadamente vaga, prácticas de aplicación abusivas y duros castigos, sumadas a las narrativas oficiales de detección y denuncia de los "traidores a la patria", apunta a una estrategia calculada para silenciar toda oposición y consolidar el control absoluto.**

144. **En consecuencia, la Relatora Especial recomienda a las autoridades rusas que:**

a) Participen de buena fe en el mandato de la Relatora Especial, entre otras cosas permitiendo el acceso sin restricciones al país y la plena interacción con todas las partes interesadas, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional, y adopten medidas urgentes para aplicar las recomendaciones contenidas en sus informes anteriores[55];

b) Revisen urgentemente la legislación en materia de seguridad nacional a fin de armonizarla con el derecho internacional, entre otras cosas reduciendo el alcance de los delitos relacionados con la traición, el espionaje y la cooperación confidencial y eliminando el lenguaje vago e impreciso. Velen por que su aplicación se limite exclusivamente a conductas que supongan una amenaza real y demostrable para la seguridad nacional y nunca se utilice como instrumento para reprimir la expresión pacífica o la actividad cívica y, especialmente, la expresión contra la guerra. Revisen inmediatamente las causas de las personas condenadas en virtud de estas disposiciones y pongan en libertad incondicionalmente a las que estén encarceladas injustamente, ofreciéndoles reparación íntegra y eliminando sus antecedentes penales;

c) Pongan fin al uso selectivo de la legislación antiterrorista contra el ejercicio pacífico de las libertades de expresión, reunión y asociación, y especialmente en las protestas contra la guerra, y velen por que se aplique, de conformidad con las normas internacionales, únicamente contra actos delictivos cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones graves, o de tomar rehenes con el fin de intimidar a una población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de adoptar una determinada medida;

d) Revoquen la legislación relativa a la "actividad extremista" utilizada en causas de motivación política y de manera que vulnera los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Revisen inmediatamente las causas de las personas condenadas en virtud de estas disposiciones y pongan en libertad sin condiciones a las que estén encarceladas injustamente, ofreciéndoles reparación íntegra y eliminando sus antecedentes penales. Revisen sustancialmente la legislación vigente en materia de seguridad pública, velando por que todas sus disposiciones estén definidas con precisión y limitadas a conductas que entrañen incitación a la violencia o a la discriminación;

[55] A/HRC/54/54, A/HRC/57/59, A/HRC/60/59 y A/79/508.

e) Deroguen inmediatamente las leyes de julio de 2025 que hacen del uso de redes privadas virtuales una circunstancia agravante en los procesos penales e introducen multas administrativas por anunciar servicios de redes privadas virtuales y por realizar búsquedas en línea de "material extremista", introducidas para reprimir la disidencia. Pongan fin al uso de medidas punitivas basadas en la vigilancia y desmantelen las disposiciones que penalizan la búsqueda de información en línea para restablecer las libertades digitales y proteger la privacidad;

f) Pongan fin de inmediato al enjuiciamiento y la inclusión en listas de "terroristas" y "extremistas" de prisioneros de guerra y detenidos civiles ucranianos por acciones relacionadas con la guerra en curso contra Ucrania y su apoyo, real o percibido. Procedan a la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles ucranianos detenidos, incluidos los condenados en virtud de la legislación sobre seguridad nacional y seguridad pública, garantizando su regreso en condiciones de seguridad y una reparación íntegra;

g) Pongan fin de inmediato a la práctica de la provocación y la inducción delictiva por parte de los servicios de seguridad en las investigaciones relacionadas con la seguridad nacional, incluida la fabricación de pruebas y la manipulación de personas para inducirlas a cometer actos delictivos;

h) Tipifiquen la tortura como delito independiente en la legislación nacional, de conformidad con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y velen por que las penas aplicables sean proporcionales a la gravedad del delito. Tipifiquen como delito "otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", en plena conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura. Garanticen la inadmisibilidad en cualquier procedimiento judicial de toda prueba obtenida mediante tortura, incluidas la violación y la violencia sexual, y velen por la investigación, enjuiciamiento y castigo independientes y rápidos de los responsables, así como por la justicia para las víctimas;

i) Pongan fin de inmediato a la detención y enjuiciamiento de niños en virtud de cargos relacionados con la "traición", el "terrorismo" y el "extremismo" por el ejercicio pacífico de los derechos humanos o por delitos leves. Promuevan la aplicación de medidas no judiciales y la imposición de penas no privativas de libertad. Velen por que los procedimientos en los que estén implicados niños cumplan plenamente las normas de justicia juvenil de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño;

j) Protejan de manera efectiva la independencia de los abogados defensores, entre otras cosas poniendo fin a las injustificadas restricciones a los viajes y a su capacidad para desempeñar su labor eficazmente, incluso en causas relativas a la seguridad nacional y la seguridad pública. Garanticen que los abogados no sean amenazados ni sometidos a intimidación, acoso, detención arbitraria, o enjuiciamiento penal por el desempeño de sus funciones profesionales. Restablezcan el pleno acceso al abogado de la propia elección, incluso en causas relacionados con secretos de Estado y seguridad nacional. Refuercen las salvaguardias contra la vigilancia y garanticen la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes;

k) Aseguren la aplicación efectiva de los derechos a un juicio justo en todas las causas relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, especialmente mediante garantías efectivas de presunción de inocencia e igualdad de medios procesales. Velen por que, entre otras cosas, la defensa tenga acceso a todo el material de la causa y a las declaraciones de los testigos, y pueda

presentar sus propios testigos y peritos. Pongan fin, asimismo, a la práctica de coartar la labor de los abogados defensores imponiéndoles obligaciones de no divulgación. Garanticen que, como norma general, los juicios solo se celebren a puerta cerrada de manera excepcional;

l) Pongan fin de inmediato al abuso de la legislación en materia de seguridad nacional, seguridad pública y, en particular, de las leyes contra el extremismo y el terrorismo, contra los grupos de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, las personalidades de los medios de comunicación y de la cultura, los opositores políticos, las personas LGBT, los Pueblos Indígenas, las minorías nacionales y religiosas y los activistas que se oponen a la guerra. Garanticen que toda designación como "terrorista" y "extremista" se efectúe únicamente a través de un proceso judicial transparente con derecho efectivo a la defensa jurídica a la apelación, y revisen todas las designaciones efectuadas hasta la fecha, garantizando que las que carezcan de las debidas garantías procesales sean objeto de revisión independiente y que las personas y grupos incluidos injustamente en las listas sean retirados de ellas y compensados íntegramente;

m) Deroguen la resolución del Tribunal Supremo de 2023 por la que se califica de "extremista" al "Movimiento Internacional LGBT" y anulen todas las condenas administrativas y penales dictadas en consecuencia. Pongan fin a la persecución y detención de personas LGBT acusadas de "extremismo" y pongan en marcha investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las violaciones de los derechos de las personas LGBT, incluidas la muerte bajo custodia y la tortura, asegurando la rendición de cuentas de los responsables y la justicia para las víctimas;

n) Anulen la decisión adoptada por el Tribunal Supremo en 2024 por la que designó al inexistente "movimiento separatista" como organización "extremista". Pongan fin a la persecución de organizaciones y defensores de los Pueblos Indígenas y las minorías nacionales con designaciones de "extremistas" y "terroristas";

o) Pongan fin de inmediato a la persecución de los migrantes, especialmente los procedentes de Asia Central, en virtud de leyes de seguridad nacional y adopten medidas eficaces para prevenir y combatir el discurso de odio y la violencia contra los migrantes. Prevengan y combatan la discriminación, el discurso de odio y los delitos motivado por el odio, también contra migrantes y refugiados, garantizando la rendición de cuentas de los responsables.